

CAPÍTULO III

JURISPRUDENCIA¹

A. Introducción

1. En este capítulo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión actualiza los estudios anteriormente publicados en sus informes anuales en torno a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos², el Tribunal Europeo de Derechos Humanos³ y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas⁴ en materia de libertad de expresión.

2. A través de capítulos de esta naturaleza la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión busca promover el estudio de la jurisprudencia comparada en la materia en cumplimiento del mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno conferido en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Québec, Canadá, en abril de 2001⁵.

B. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

3. El artículo 13 de la Convención Americana reconoce a todo individuo el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión señalando que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

- a. el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
- b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

¹ La elaboración de algunas secciones del presente capítulo fue posible gracias a la investigación realizada por el señor Wayne DeFreitas, estudiante de segundo año de la facultad de Derecho de *George Washington University*, y que fuera pasante de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión entre los meses de agosto y noviembre del año 2006.

² CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2002. Volumen III. Capítulo III.

³ CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2003. Volumen III. Capítulo III.

⁴ CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2004. Volumen III. Capítulo III.

⁵ En el curso de dicha Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno ratificaron el mandato del Relator Especial para la Libertad de Expresión señalando que los Estados “apoyarán la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el área de la libertad de expresión, a través del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y procederán a la difusión de los trabajos de jurisprudencia comparada”.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

4. En su Informe Anual correspondiente al año 2002, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reseñó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Hasta tal año, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión comprendía la Opinión Consultiva OC 5/85 sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas⁶ y las sentencias en los casos de *La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) v. Chile*⁷ e *Ivcher Bronstein v. Perú*⁸. Desde entonces, la Corte Interamericana ha emitido cuatro nuevas decisiones vinculadas específicamente a violaciones al artículo 13 de la Convención Americana, que han permitido continuar avanzando en crear importante jurisprudencia en materia de libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos.

5. Los temas que se tratan en esta sección se dividen en los siguientes títulos: difamación y acceso a la información. Los casos que figuran bajo el título de difamación refieren a situaciones en que se emprendieron acciones legales por desacato, calumnias, injurias o difamación por presuntamente dañar la reputación de personas a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El caso examinado bajo el título de derecho de acceso a la información está referido a la negativa de un funcionario del Estado de brindar información que le fue solicitada sin haber dado una justificación válida para ello.

1. Difamación

*Caso Mauricio Herrera Ulloa ("La Nación") v. Costa Rica (2 de julio de 2004)*⁹

6. En 1995 el periodista Mauricio Herrera Ulloa, del diario *La Nación* de San José, publicó varias notas en las que reproducía parcialmente informaciones aparecidas en medios de comunicación belgas sobre supuestos cuestionamientos a Félix Przedborski Chawa, un diplomático honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica en Austria. El funcionario demandó penalmente a Herrera Ulloa por difamación, calumnias y publicación de ofensas, y al periodista y a *La Nación* como responsables civiles solidarios.

7. El 29 de mayo de 1998 el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José absolvió al periodista de los delitos de difamación, calumnias y publicación de ofensas. Esa primera sentencia fue recurrida en casación y anulada en una resolución del 7 de mayo de 1999 que ordenó un nuevo juicio. El proceso se volvió a realizar y el 12 de noviembre de 1999 el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José dictó una sentencia en la que declaraba sin lugar la prueba de la verdad (*exceptio veritatis*) y condenaba a Herrera Ulloa como autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación. Adicionalmente, al periodista y al diario se les condenaba solidariamente en lo civil a indemnizar el supuesto daño moral causado. La sentencia ordenaba además la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en el periódico *La Nación*. Al

⁶ Corte I.D.H., *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf.

⁷ Corte I.D.H., *Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros)*. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf.

⁸ Corte I.D.H., *Caso Ivcher Bronstein*. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf.

⁹ Corte I.D.H., *Caso Herrera Ulloa ("La Nación")*. Sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf.

periódico *La Nación* se le ordenaba retirar el enlace que existía en su página en Internet entre el apellido Przedborski y los artículos querellados, y a establecer una liga entre estos artículos y la parte dispositiva de la sentencia. Asimismo, como consecuencia de la sentencia el nombre del periodista debía ser incluido en el registro judicial de delincuentes. La sentencia fue recurrida en casación y confirmada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en una resolución del 24 de enero de 2001.

8. El 1 de marzo de 2001 Herrera Ulloa y los representantes del diario *La Nación* presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de enero de 2003 la Comisión presentó a la Corte Interamericana una demanda contra el Estado de Costa Rica para que decidiera, entre otros, si el Estado había violado el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y para que dejara sin efecto la sentencia condenatoria y se reparara a las víctimas. El 2 de julio de 2004 la Corte Interamericana dictó una sentencia en la que declaró que el Estado había violado el derecho a la libertad de expresión de Mauricio Herrera Ulloa, y ordenó, entre otros, dejar sin efecto, en todos sus extremos, la sentencia condenatoria del 12 de noviembre de 1999 en contra del periodista.

9. En sus consideraciones y partiendo de su jurisprudencia en la materia, la Corte Interamericana, reiteró el papel esencial que cumple la libertad de expresión en una sociedad democrática. En palabras de la Corte:

Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad¹⁰.

10. La Corte planteó además que quienes desarrollan actividades e influyen en situaciones de interés público deben estar más expuestos al escrutinio público y al debate que los demás pues dicha exposición es esencial para el funcionamiento de la democracia:

Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público¹¹.

11. La Corte aclaró que esto no significaba que el honor de los funcionarios públicos no haya de ser protegido jurídicamente, sino que dicha protección debía ser acorde con los principios del pluralismo democrático. La distinción en cuestión no se funda, consideró la Corte, en la calidad del sujeto sino en el interés público de sus actividades o actuaciones.

12. La Corte consideró, además, que en el proceso penal seguido contra Herrera Ulloa se había condenado al periodista por no haber logrado probar la veracidad de los hechos atribuidos por los medios belgas al ex diplomático costarricense. La Corte determinó que dicha exigencia constituía una limitación excesiva a la libertad de expresión, ya que producía un “efecto disuasivo, atemorizador e inhibitor” sobre los periodistas, y en consecuencia, impedía el debate sobre temas de interés público¹².

13. Cabe destacar que la sentencia de la Corte recoge el voto razonado concurrente de su presidente. En dicho voto, el juez García Ramírez se pregunta si en situaciones como las

¹⁰ Id., párrafo 116.

¹¹ Id., párrafo 129.

¹² Id., párrafo 133.

planteadas en el caso resultaba "necesario y conveniente, para la adecuada solución de fondo del problema [...] recurrir a la solución penal, o basta con prever responsabilidades de otro orden y poner en movimiento reacciones jurídicas de distinta naturaleza: administrativas y civiles, por ejemplo [...]". Seguidamente, el magistrado señala que "es preciso recordar que, en general --y salvo rezagos históricos y tentaciones autoritarias, que no son pocas ni se hallan en receso--, prevalece la corriente favorable al denominado Derecho penal "mínimo", es decir, al empleo moderado, restrictivo, marginal, del aparato punitivo, reservado precisamente para aquellos casos en que es imposible o francamente inadecuado optar por soluciones menos abrumadoras. El aparato penal constituye la herramienta más severa con que cuenta el Estado -la sociedad, mejor todavía-, en el despliegue de su monopolio de la fuerza, para enfrentar conductas que atentan gravemente --muy gravemente-- contra la vida de la comunidad y los derechos primordiales de sus integrantes"¹³.

*Caso Ricardo Canese v. Paraguay (31 de agosto de 2004)*¹⁴

14. En agosto de 1992, en el marco de la campaña política para las elecciones presidenciales de 1993, el candidato Ricardo Canese ofreció declaraciones a medios paraguayos en las que cuestionó la idoneidad del candidato Juan Carlos Wasmosy, a quien atribuía presuntas irregularidades relacionadas con la construcción de la central hidroeléctrica binacional de Itaipú y una supuesta relación con la familia de Alfredo Stroessner. Wasmosy había sido presidente de la Junta Directiva de CONEMPA, una empresa que había estado en parte a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica.

15. El 23 de octubre de 1992 los directores de CONEMPA demandaron a Canese por los delitos de difamación e injuria. En sentencia del 22 de marzo de 1994 el Juez de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno condenó a Canese por ambos delitos y le impuso una pena de cuatro meses de penitenciaría y el pago de una multa y costas. El tribunal también lo condenó en lo civil. La decisión fue apelada y el 4 de noviembre de 1997 la Tercera Sala del Tribunal de Apelación en lo Criminal resolvió recalificar los delitos atribuidos a Canese tipificándolos como difamación, reduciendo la condena de penitenciaría a dos meses así como el monto de la multa impuesta. Esta decisión también fue recurrida por las partes. El 2 de mayo de 2001 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió desestimar un recurso de nulidad, no hacer lugar a un recurso de revisión y en cuanto a un recurso de apelación presentado confirmó el acuerdo y sentencia del 4 de noviembre de 1997. En el transcurso del proceso a Ricardo Canese se le había negado la posibilidad de viajar fuera del país en varias ocasiones.

16. El 2 de julio de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia sobre el caso. El 12 de junio de 2002 la Comisión sometió ante la Corte la demanda contra el Estado del Paraguay para que el Tribunal decidiera si el Estado había violado, entre otros, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

17. Entre tanto, el 12 de agosto de 2002, Ricardo Canese y sus abogados presentaron un recurso de revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. El 11 de diciembre de 2002 la Sala Penal resolvió hacer lugar al recurso de revisión, anular las sentencias del 22 de marzo de 1994 y del 4 de noviembre de 1997, absolver de culpa y pena al señor Canese y cancelar todos los registros relacionados con el caso. Como parte de su razonamiento, el órgano judicial señaló que el nuevo Código Penal --vigente desde febrero de 1999- contenía causales de exención de responsabilidad penal en los casos de interés público.

¹³ Id., Voto concurrente de Sergio García Ramírez, párrafos 14-5.

¹⁴ Corte I.D.H., *Caso Ricardo Canese*. Sentencia del 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf.

18. El 31 de agosto de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que condenó al Estado del Paraguay, entre otros, por violación al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de Ricardo Canese.

19. La sentencia de la Corte reiteró el concepto de que, en el caso de afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre asuntos de interés público, debe existir un mayor margen de tolerancia.

20. En sus consideraciones respecto del artículo 13 de la Convención Americana, la Corte Interamericana resaltó la importancia de la libertad de expresión en el marco de una campaña electoral, en tanto que constituye:

[...] una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión¹⁵.

21. La Corte señaló la necesidad de que se proteja la libertad de expresión en el marco de una contienda electoral, pues todos han de poder indagar y cuestionar la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disenter y confrontar sus propuestas, para formarse un criterio con miras al ejercicio del sufragio.

22. En opinión de la Corte, cuando Canese emitió sus declaraciones a los medios se refería a un asunto de interés público, por ello cuando los medios de comunicación las transmitieron a los electores contribuyeron a que el electorado contara con más información y “diferentes criterios previo a la toma de decisiones”¹⁶.

23. En este caso, la Corte determinó no sólo que la condena impuesta a Canese durante ocho años, sino que las restricciones para salir del país y el propio proceso penal en su contra constituyeron “una sanción innecesaria y excesiva por las declaraciones que emitió la presunta víctima en el marco de la campaña electoral [...]; así como también limitaron el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública y restringieron el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión del señor Canese de emitir sus opiniones durante el resto de la campaña electoral”¹⁷.

24. Adicionalmente, la Corte consideró que la sanción penal, el proceso y el impedimento de salida constituyeron medios indirectos de restricción a la libertad de expresión de Canese quien, luego de emitirse la condena, había sido despedido del medio de comunicación en el que trabajaba¹⁸.

*Caso Humberto Palamara Iribarne v. Chile (22 de noviembre de 2005)*¹⁹

25. En marzo de 1993 Humberto Palamara Iribarne, un oficial retirado de la marina chilena, se desempeñaba como empleado civil de la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval en Punta Arenas. Antes de su retiro, producido el 1 de enero de 1993, Palamara Iribarne había escrito

¹⁵ Id., párrafo 88.

¹⁶ Id., párrafo 94.

¹⁷ Id., párrafo 106.

¹⁸ Id., párrafo 107.

¹⁹ Corte IDH. *Caso Humberto Palamara Iribarne*. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf.

un libro titulado “Ética y Servicios de Inteligencia”, el cual abordaba “aspectos relacionados con la necesidad de que el personal de inteligencia, en aras de evitar violaciones a los derechos humanos, se rigiera por conductas éticas”. Entre enero y febrero de 1993 Palamara Iribarne intentó publicar y comercializar el libro, encargando para ello a una imprenta local la edición de mil ejemplares del texto.

26. Palamara Iribarne no había solicitado autorización alguna a las autoridades navales para la publicación de su libro. El 1 de marzo de 1993 las autoridades militares notificaron a Palamara Iribarne que la publicación de su libro había sido prohibida por estimar que su contenido “atentaba contra la seguridad y defensa nacionales”. Ese mismo día el Juez Naval de Magallanes ordenó a Palamara Iribarne que detuviera la publicación y que “acompañara al Jefe del Departamento para que retiraran todos los antecedentes que del libro existieran en la imprenta”. Palamara Iribarne no concurrió ese día a la imprenta. Como consecuencia de ello se inició un proceso penal en el Juzgado Naval de Magallanes en contra de Palamara Iribarne por los delitos de “desobediencia” e “incumplimiento de deberes militares”. El 1 de marzo de 1993, en el marco del mencionado procedimiento penal, se incautaron todos los ejemplares de “Ética y Servicios de Inteligencia” presentes en la imprenta y en el domicilio de Palamara Iribarne, como la matricería electrostática del libro, obligando además a que Palamara Iribarne borre del disco duro de su computador el texto íntegro del libro.

27. El 10 de junio de 1996 el Juez Naval de Magallanes dictó sentencia contra Palamara Iribarne por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares condenándolo, entre otros, a “61 días de presidio militar menor en su grado mínimo por incumplimiento de deberes militares”, a “540 días de reclusión militar menor en su grado mínimo por desobediencia militar”, a “la pena [...] de pérdida del estado militar” y “al comiso de [varios] ejemplares del libro”. La resolución fue apelada y el 2 de enero de 1997 la Corte Marcial redujo a 61 días la pena por el delito de desobediencia militar, eximiendo a Palamara Iribarne del resto de delitos.

28. El 26 de marzo de 1993 se había ordenado a Palamara Iribarne que guardase reserva pertinente sobre la causa judicial seguida en su contra y que se abstuviera de realizar comentarios “críticos públicos o privados, escritos o hablados, que vayan en desmedro o dañen la imagen de la Institución, autoridad naval o de quienes instruyen la causa judicial e investigación sumaria administrativa en su contra”. Pese a la prohibición Palamara Iribarne convocó a una conferencia de prensa criticando la actuación de la Fiscalía Naval en el proceso seguido en su contra. A consecuencia de ello Palamara Iribarne fue denunciado y procesado por el delito de desacato. El 7 de septiembre de 1994 el Juzgado Naval de Magallanes absolvió a Palamara Iribarne del delito de desacato. A pesar de que dicha resolución no fue apelada, en noviembre del mismo año el Juez Naval de Magallanes facultó al Juez Naval de Valparaíso para elevar los autos “en consulta” a la Corte Marcial, la cual, en enero de 1995 revocó la sentencia de primera instancia, determinando una pena contra Palamara Iribarne de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, imponiéndole además una multa de once sueldos.

29. El 16 de enero de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia sobre el caso. El 13 de abril de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte Interamericana a fin de que el Tribunal decidiera si el Estado había violado, entre otros, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 22 de noviembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que condenó al Estado de Chile, entre otros, por violación al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de Humberto Palamara Iribarne.

30. Entre sus consideraciones iniciales la Corte señaló que debía determinar, en primer lugar, “si el Estado realizó actos de censura previa incompatibles con la Convención Americana al prohibir al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne que publicara su libro [...], así como al incautar

los ejemplares editados del mismo, [sometiéndolo] a un proceso por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes militares". En segundo lugar, el Tribunal indicó que debía establecer "si la imputación del delito de desacato a través del proceso penal militar instaurado [...] por sus declaraciones, así como las sanciones penales y militares impuestas como consecuencia de ese proceso, y la investigación administrativa iniciada y posteriormente archivada restringieron o no indebidamente su derecho a la libertad de pensamiento y expresión".²⁰

31. La Corte señaló que la difusión y la expresión del pensamiento son indivisibles. En este sentido, la Corte sostuvo que:

En el presente caso, para que el Estado garantizara efectivamente el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del señor Palamara Iribarne no bastaba con que permitiera que escribiera sus ideas y opiniones, sino que tal protección comprendía el deber de no restringir su difusión, de forma tal que pudiera distribuir el libro utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas y opiniones al mayor número de destinatarios, y que éstos pudieran recibir tal información²¹.

32. En el caso la Corte decidió no abordar la cuestión relativa al supuesto deber de confidencialidad que Palamara Iribarne tenía respecto de cierta información vertida en su libro. La Corte señaló que "resultaba lógico que la formación y experiencia profesional y militar del señor Palamara lo ayudaran a escribir el libro, sin que esto implique *per se* un abuso al ejercicio de su libertad de pensamiento y de expresión"²². Agregó el Tribunal que el deber de confidencialidad no abarca a la información relativa a la institución o a las funciones que ésta realiza cuando se hubiere hecho pública²³. Por ello, la Corte concluyó que:

[...] las medidas de control adoptadas por el Estado para impedir la difusión del libro "Ética y Servicios de Inteligencia" del señor Palamara Iribarne constituyeron actos de censura previa no compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, dado que no existía ningún elemento que, a la luz de dicho tratado, permitiera que se afectara el referido derecho a difundir abiertamente su obra, protegido en el artículo 13 de la Convención²⁴.

33. Ahora bien, es importante destacar que la Corte sostuvo que "puede ocurrir que los empleados o funcionarios de una institución tengan el deber de guardar confidencialidad sobre cierta información a la que tienen acceso en ejercicio de sus funciones, cuando el contenido de dicha información se encuentre cubierto por el referido deber. El deber de confidencialidad no abarca a la información relativa a la institución o a las funciones que ésta realiza cuando se hubiere hecho pública. Sin embargo, en ciertos casos, el incumplimiento del deber de confidencialidad puede generar responsabilidades administrativas, civiles o disciplinarias"²⁵.

34. La Corte recalcó que el derecho a la libertad de expresión no era un derecho absoluto y que el artículo 13.2 prevé la posibilidad de establecer restricciones a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores. Asimismo, la Corte reafirmó que "el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita"²⁶.

²⁰ Id., párrafo 70.

²¹ Id., párrafo 73.

²² Id., párrafo 76.

²³ Id., párrafo 77.

²⁴ Id., párrafo 78.

²⁵ Id., párrafo 77.

²⁶ Id., párrafo 79.

35. La Corte consideró que las opiniones vertidas por Palamara Iribarne con relación a las actuaciones realizadas por el Fiscal Naval de Magallanes en el marco del proceso penal militar seguido en su contra “gozaban de una mayor protección que [permite] un margen de apertura para un debate amplio, esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático”²⁷. La Corte señaló que este umbral diferente de protección “no se asienta en la calidad del sujeto, sino que en el carácter de interés público que conllevan las actividades de una persona determinada, en este caso [...] las actuaciones de la Fiscalía en el proceso penal militar”²⁸.

36. En cuanto a la aplicación del delito de desacato, la Corte estimó que en el caso se había utilizado “la persecución penal de una forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, por lo cual se privó al señor Palamara Iribarne del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en relación con las opiniones críticas que tenía respecto de asuntos que le afectaban directamente y guardaban directa relación con la forma en que las autoridades de la justicia militar cumplían con sus funciones públicas en los procesos a los que se vio sometido”. Continuó la Corte señalando que “la legislación sobre desacato aplicada al señor Palamara Iribarne establecía sanciones desproporcionadas por realizar críticas sobre el funcionamiento de las instituciones estatales y sus miembros, suprimiendo el debate esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático y restringiendo innecesariamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”²⁹.

37. La Corte reconoció el avance que implicaba la derogación del delito de desacato del Código Penal en Chile. Sin embargo, observó que el ordenamiento interno chileno conservaba todavía normas sobre desacato en el Código de Justicia Militar. Por ello, concluyó que “al haber incluido en su ordenamiento interno normas sobre desacato contrarias al artículo 13 de la Convención, algunas todavía vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención”³⁰.

2. Derecho de acceso a la información

*Caso Marcel Claude Reyes y otros v. Chile (19 de septiembre de 2006)*³¹

38. El 24 de diciembre de 1991 la empresa *Forestal Trillium Ltda.* obtuvo la aprobación del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile para realizar un proyecto de deforestación en la zona conocida como “Río Cóndor”. El 6 de mayo de 1998 Marcel Claude Reyes, director de la *Fundación Terram*, envió una carta al Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile solicitando información a fin de evaluar “los factores comerciales, económicos, sociales del proyecto Río Cóndor, medir el impacto sobre el medio ambiente [...] y activar el control social respecto de la gestión de los órganos del Estado que tienen o han tenido injerencia en el desarrollo del proyecto de explotación”³².

²⁷ Id., párrafo 82

²⁸ Id., párrafo 84

²⁹ Id., párrafo 88.

³⁰ Id., párrafo 95.

³¹ Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf.

³² La carta de la *Fundación Terram* solicitaba la información siguiente del Comité:

1. Los contratos concertados entre el Estado chileno y el inversor extranjero con respecto al proyecto Río Cóndor, indicando la fecha y la oficina notarial en que éstos se celebraron y copia de esos documentos, dado que se trataba de instrumentos.

2. Las identidades de los inversores del proyecto, extranjeros y/o nacionales.

39. El Vicepresidente Ejecutivo del Comité invitó a Marcel Claude Reyes y Arturo Longton a una reunión el 19 de mayo de 1998 a fin de debatir los detalles de la solicitud. En un fax enviado posteriormente en la misma fecha se entregó parte de la información solicitada. Fundación Terram envió cartas el 3 de junio y 2 de julio de 1998 reiterando su pedido. La información faltante nunca fue suministrada, tampoco se presentó una negativa formal dando las razones pertinentes.

40. El 27 de julio de 1998 Marcel Claude, Arturo Longton y Sebastián Cox presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando que se ordenara al Comité de Inversiones Extranjeras que respondiera al pedido de información y pusiera a disposición la información faltante en un plazo razonable. El 29 de julio de 1998 la acción fue declarada inadmisibles debido a falta de fundamentos. Posteriormente, el 31 de julio de 1998 presentaron un recurso de reposición para obtener la revocación de la decisión de tribunal, que fue rechazado el 6 de agosto de 1998. Finalmente, el 31 de julio de 1998 presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema. El 18 de agosto de 1998 esta solicitud fue considerada inadmisibles.

41. El 17 de diciembre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia sobre el caso. El 8 de julio de 2005 la Comisión presentó la demanda ante la Corte Interamericana a fin de que el Tribunal decidiera si la falta de entrega de información así como la falta de un recurso judicial efectivo para impugnarla generaban la responsabilidad internacional del Estado por la violación a los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión y a la protección judicial, establecidos en los artículos 13 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. El 19 de septiembre de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que condenó al Estado de Chile, entre otros, por violación al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de Marcel Claude Reyes y Arturo Longton.

42. En su decisión la Corte Interamericana sostuvo que el artículo 13 de la Convención al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Con ello, la Corte Interamericana se convirtió en el primer tribunal internacional en resaltar que el acceso a la información constituye un derecho humano. En palabras de la Corte:

[el artículo 13] ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por

...continuación

3. Los antecedentes que el Comité de Inversiones Extranjeras consideró, en Chile y en el extranjero, para asegurar la seriedad y pertinencia de los inversores y los acuerdos de dicho Comité en los que se aceptaron estos precedentes como suficientes.

4. El monto total de la inversión autorizada para el proyecto Río Cóndor, los medios y fechas de las transferencias de capital y la existencia de créditos vinculados al proyecto.

5. El capital que efectivamente ingresó al país a la fecha, tanto real como en créditos conexos.

6. Información en poder del Comité y/o la información que se encuentra en poder del Comité y/o que haya sido requerida por otras entidades públicas o privadas y que se refiere al control de las obligaciones que comportan los títulos de la inversión extranjera o las empresas en que participan, y si el Comité ha tomado nota de alguna infracción o delito.

7. Información sobre si el Vicepresidente Ejecutivo de este Comité ha ejercido la autoridad que le concede el Artículo 15a del Decreto Ley 600, de solicitar, de todos los servicios o empresas públicas y privadas, los informes y antecedentes requeridos para la consecución de los objetivos del Comité. En caso afirmativo, que se ponga esta información a disposición de esta Fundación.

la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea³³.

43. Asimismo, en el marco del derecho de acceso a la información, la Corte estableció que éste se encuentra regido por "el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones"³⁴.

44. Ahora bien, la Corte reconoció que este derecho puede admitir restricciones; sin embargo, ellas "deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse "por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas"³⁵. Además, aclaró que "la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte estableció que "las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo"³⁶, colocando la carga de la prueba de las restricciones posibles a este derecho en manos del Estado³⁷.

45. En el caso, la Corte consideró que el establecimiento de restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado a través de la práctica de sus autoridades, sin la observancia de los límites convencionales "crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial", generando inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para restringirlo. La Corte consideró por ello que "[al] no recibir la información solicitada, ni una contestación motivada sobre las restricciones a su derecho al acceso a la información bajo el control del Estado, los señores Claude Reyes y Longton Guerrero vieron afectada la posibilidad de realizar un control social de la gestión pública"³⁸.

46. Finalmente, la Corte valoró positivamente que "Chile [haya] realizado importantes avances en materia de consagración normativa del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que incluyen entre otros una reforma constitucional, y que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley sobre dicho derecho". Sin embargo, entendió que Chile, de acuerdo a lo previsto por el artículo 2 de la Convención, debía "adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados"³⁹.

³³ Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros*, párrafo 77.

³⁴ Id., párrafo 92.

³⁵ Id., párrafo 89.

³⁶ Id., párrafos 90-1.

³⁷ Id., párrafo 92.

³⁸ Id., párrafo 99.

³⁹ Id., párrafo 163.

En relación a este último punto, la Corte ordenó al Estado realizar "la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información"⁴⁰.

C. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

47. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales contiene en su artículo 10 una disposición específica en relación con el derecho a la libertad de expresión que señala lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

48. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comparado el artículo 13 de la Convención Americana con el artículo 10 del Convenio Europeo y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, llegando a la conclusión de que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas⁴¹.

49. En su Informe Anual correspondiente al año 2003, la Relatoría Especial consideró parte de la amplia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, señalando su utilidad como "fuente valiosa [para] arrojar luz para la interpretación de este derecho en el sistema interamericano y [...] como una herramienta útil para los profesionales letrados y demás interesados"⁴².

50. Las secciones que figuran a continuación se refieren a casos que generaron decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre temas relacionados con el derecho de la libertad de expresión a partir del año 2004. Las decisiones del Tribunal Europeo pueden ser utilizadas como una importante referencia de jurisprudencia comparada al analizar e interpretar disposiciones de la Convención Americana y de la Declaración Americana similares a las del Convenio Europeo.

51. Los temas que se tratan en esta sección se dividen en los siguientes títulos: difamación, orden público y censura previa. Los casos que figuran bajo el título de difamación refieren a situaciones en que se emprendieron acciones legales por difamación por presuntamente

⁴⁰ Id., párrafo 165.

⁴¹ Corte I.D.H., *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-5/85, párrafo 50.

⁴² CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2003. Volumen III. Capítulo III, párrafo 2.

dañar la reputación de personas a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Los casos examinados bajo el título de orden público están referidos a situaciones en que las restricciones cuestionadas fueron impuestas sobre la base de que eran necesarias para la protección del orden público. En la tercera sección se describen situaciones en las que existió una restricción previa a la publicación.

52. Cabe señalar, al igual que en los anteriores informes anuales, que los casos aquí relatados son una selección de la jurisprudencia del Tribunal Europeo producida, en este caso desde el año 2004, y relacionada con el derecho a la libertad de expresión. El texto completo de estos casos puede examinarse en el sitio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Internet⁴³.

1. Difamación

*Caso Amihalachioaie v. Moldavia (20 de abril de 2004)*⁴⁴

53. En el año 2000 un grupo de parlamentarios y el Defensor del Pueblo presentaron una solicitud a la Corte Constitucional de Moldavia para que se declarase inconstitucional la Ley No. 395-XIV, que ordenaba la colegiación obligatoria de los abogados de Moldavia en el *Bar Council*, una organización nacional que agrupaba a los colegios de abogados locales en dicho país. El 15 de febrero de 2000 la Corte Constitucional de Moldavia decidió que la Ley No. 395-XIV era inconstitucional. Gheorghe Amihalachioaie, presidente del *Bar Council* de Moldavia, criticó la decisión de la Corte Constitucional en una entrevista telefónica realizada para una revista local. Posteriormente, en un artículo publicado en dicha revista se hizo referencia a lo expresado por Amihalachioaie en tal conversación telefónica. El 18 de febrero de 2000 el presidente de la Corte Constitucional informó a Amihalachioaie que sus comentarios eran considerados como una "falta de respeto con la Corte" ("*lack of regard of the Court*") de acuerdo al Código de Procedimientos Constitucionales vigente. El 6 de marzo de 2000 Amihalachioaie fue condenado por la Corte Constitucional de Moldavia a pagar una multa.

54. En su fallo el Tribunal Europeo concluyó que la restricción impuesta por la Corte Constitucional estaba prevista en la ley y que apuntaba a un fin legítimo: mantener la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Sin embargo, consideró que la restricción a la libertad de expresión de Amihalachioaie no era "necesaria en una sociedad democrática" pues sus comentarios fueron vertidos en un contexto de profundo debate en torno a un asunto de interés general: la decisión de la Corte Constitucional de Moldavia en torno a la colegiación obligatoria de los abogados en dicho país. El Tribunal añadió que no existía una "necesidad social imperiosa" para justificar la medida, y que si bien la multa no era significativa, al estar cerca del máximo imponible en la ley para estos casos, ésta tenía un valor simbólico que mostraba la intención del Estado de infligir un castigo severo en contra de Amihalachioaie por sus comentarios.

*Caso Chauvy y otros v. Francia (29 de junio de 2004)*⁴⁵

55. El 10 de febrero de 1999 Gérard Chauvy, Francis Esmenard y la editorial *Albin Michel* fueron condenados a pagar una multa así como una reparación en la vía civil por daños en

⁴³ Disponible en: <http://www.echr.coe.int>.

⁴⁴ *Amihalachioaie v. Moldova*, No. 60115/00, ECHR 2004. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Amihalachioaie&sessionid=9803166&skin=hudoc-en>.

⁴⁵ *Chauvy et al. v. France*, No. 58148/00, ECHR 2004. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=chauvy&sessionid=9803209&skin=hudoc-en>.

perjuicio de los esposos Aubrac, miembros del movimiento conocido en Francia como "*La Resistance*". El proceso se inició en los tribunales franceses con motivo de la publicación del libro titulado "*Aubrac, Lyon 1943*", que recogía la cronología de eventos alrededor de "*La Resistance*" y varios de sus líderes en 1943. En dicho texto se señalaba, *inter alia*, que Raymond Aubrac había traicionado a Jean Moulin, miembro de "*La Resistance*", ocasionando su posterior arresto, tortura y muerte por parte de miembros de la GESTAPO durante la Segunda Guerra Mundial. Los tribunales franceses ordenaron la publicación de un aviso advirtiendo sobre el contenido del libro en cinco diarios y que éste se incluyera en cada una de las copias supervenientes del libro.

56. En su decisión el Tribunal Europeo afirmó que la búsqueda de la verdad histórica se encuentra protegida en el marco del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que no era competente para determinar la ocurrencia o determinación de asuntos de carácter histórico, indicando que ello es parte de un continuo debate en torno a ciertos eventos y a su interpretación por parte de los historiadores.

57. El Tribunal consideró además que aunque existía interés público en conocer las circunstancias de la detención de Jean Moulin, era necesario balancear dicha necesidad con la protección de la reputación de los esposos Aubrac. El Tribunal sostuvo la proporcionalidad de las sanciones pecuniarias y la publicación de las advertencias señalando que encontró convincente la evidencia presentada por el Estado indicando que Chauvry no habría aplicado las reglas fundamentales del método histórico al escribir "*Aubrac, Lyon 1943*". Señaló además que las medidas eran proporcionales al interés protegido (la reputación de los esposos Aubrac) porque los tribunales franceses no ordenaron (como les había sido solicitado) la destrucción de los ejemplares del libro ni prohibieron su circulación.

*Caso Karhuvaara e Italehti v. Finlandia (16 de noviembre de 2004)*⁴⁶

58. El 31 de octubre de 1996 el diario *Italehti* publicó un artículo relacionado al proceso penal en contra del señor A, un abogado de la ciudad de Seinäjoki. El artículo llevaba el título: "Su esposa es la presidenta del Comité Parlamentario para la Educación y la Cultura – Abogado de Seinäjoki golpea a policía en un restaurante". A través de esta publicación se informó además que éste era esposo de la señora A, miembro del parlamento finlandés y presidenta del Comité Nacional para la Educación y la Cultura en Finlandia. El 21 de noviembre y el 10 de diciembre de ese mismo año, *Italehti* publicó nuevos artículos relacionados con el proceso penal y la condena impuesta al señor A. El proceso penal en contra del señor A fue ampliamente publicitado y discutido en los medios de prensa locales. Ninguna vinculación se realizaba sobre la señora A en torno a los hechos delictivos allí descritos. Sin embargo, la señora A fue objeto de sátiras políticas en un programa de televisión local.

59. Posteriormente, en abril de 1997 la señora A inició un proceso penal en contra de Pekka Karhuvaara, director de *Italehti*, y dos periodistas del diario, alegando una intromisión indebida en su vida privada. El 3 de diciembre de 1998 el director y los periodistas fueron condenados al pago de una multa y de una reparación por daños por invasión de la privacidad en favor de la señora A. El 20 de noviembre de 1999 Karhuvaara y la empresa acudieron al Tribunal Europeo alegando la violación del artículo 10 del Convenio Europeo por parte de Finlandia.

60. En su fallo el Tribunal Europeo consideró que ninguno de los artículos publicados contenía alegaciones sobre la participación de la señora A en los delitos cometidos por el señor A.

⁴⁶ *Karhuvaara and Italehti v. Finland*, No. 53678/00, ECHR 2004. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Karhuvaara&sessionid=10184705&skin=hudoc-en>.

Asimismo, indicó que los artículos no mencionaban aspecto alguno relacionado a la participación política o la vida privada de la señora A, salvo el hecho que estuviera casada con el señor A, ambas circunstancias que además eran de conocimiento general antes de la publicación de las notas en el diario. Por ello, el Tribunal concluyó que los artículos no estaban referidos a asuntos de interés público donde la señora A estuviera involucrada.

61. Es interesante señalar que aunque el Tribunal Europeo reconoció que las notas del diario pusieron un especial énfasis en la relación conyugal del señor y la señora A con el propósito de mejorar las ventas del periódico, consideró que lo anterior no justificaba la condena impuesta. Recordó para ello su estándar desarrollado en casos anteriores en cuanto a que en una sociedad democrática inclusive la información y las ideas que puedan resultar ofensivas, chocantes o perturbadoras se encuentran protegidas en el marco del artículo 10 del Convenio Europeo. El Tribunal señaló además que los límites permisibles a la crítica, en el caso de los políticos, son más amplios que los de los particulares. Por ello, concluyó que las sanciones impuestas no resultaban "necesarias en una sociedad democrática", y que por tanto eran restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión.

*Caso Selistö v. Finlandia (16 de noviembre de 2004)*⁴⁷

62. En enero y febrero de 1996 Seija Selistö, periodista del diario *Pohjalainen*, publicó dos artículos donde se describía la presunta negligencia cometida por un cirujano (X) y que habría causado la muerte de una paciente en la sala de operaciones de un hospital local en diciembre de 1992. Los artículos periodísticos fueron publicados bajo los títulos "*Si sólo pudiera aferrarme a la vida otra vez – ¿Cómo sobrevivir todo esto?*" y "*El caso de Eeva nos enseñó algo – Estamos preocupados por la salud de nuestros pacientes – Complicaciones que surgen después de las cirugías*". El esposo de la paciente, el señor Haapalainen, había interpuesto una denuncia en contra de X y otro cirujano que asistió a la intervención médica. Al examinar la queja, el Consejo Médico Legal de Finlandia concluyó que los cirujanos no fueron responsables de la muerte de la paciente. Como resultado de ello, en abril de 1994, el procurador del condado de Vaasa decidió no formalizar la denuncia en contra de X. Posteriormente, como resultado de las publicaciones, el procurador de Vaasa y X presentaron una denuncia por difamación en contra del Selistö y del señor Elenius, editor de *Pohjalainen*. El 26 de mayo de 1999 Selistö fue condenada a pagar una multa por el delito de difamación continuada y Elenius fue condenado a pagar una multa por ejercicio negligente de la libertad de prensa.

63. En su decisión el Tribunal Europeo de Derechos Humanos evaluó si la restricción impuesta era necesaria en una sociedad democrática, es decir, si las razones dadas por el Estado para establecer la condena fueron "relevantes y suficientes" para limitar la libertad de expresión de Selistö. En su examen el Tribunal observó que las publicaciones hacían referencia tanto a las experiencias personales del señor Haapalainen como a temas de interés público (la seguridad en el tratamiento de los pacientes en los hospitales). El Tribunal valoró positivamente el hecho de que en ninguno de los artículos publicados se mencionara el nombre, la edad o el género de X. Consideró además que X tuvo la oportunidad de presentar su versión de los hechos luego de las publicaciones, pero que decidió no hacerlo para evitar que su identidad se revelara al público. Concluyó por ello que ningún aspecto de la ética periodística había sido violado o que Selistö haya actuado de mala fe. Por el contrario, sostuvo que el propósito de las notas era discutir asuntos de la seguridad de los pacientes en los hospitales y que el caso de la señora Haapalainen fue relatado como meramente representativo de dicha problemática. Por ello, el Tribunal encontró que las razones expresadas para

⁴⁷ *Selistö v. Finland*, No. 56767/00, ECHR 2004. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Selist%F6&sessionid=10184835&skin=hudoc-en>.

establecer la restricción y proteger la reputación profesional de X eran insuficientes dado que Selistö estaba informando sobre asuntos de legítimo interés general.

*Caso Steel y Morris v. Reino Unido (15 de febrero de 2005)*⁴⁸

64. El 20 de septiembre de 1990 la empresa transnacional *McDonald's* inició una acción civil por difamación (*libel*) en contra de Helen Steel y David Morris, dos miembros de la organización *London Greenpeace*, solicitando el pago de una reparación por daños luego de la publicación de un panfleto de seis páginas titulado "*What's wrong with McDonald's?*". Los panfletos eran parte de una campaña medioambiental que *London Greenpeace* venía desarrollando en el Reino Unido. El 31 de marzo de 1999 Steel y Morris fueron condenados a pagar una reparación civil en favor de *McDonald's* por haber participado en la producción y distribución de tales panfletos.

65. En su fallo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el monto que Steel y Morris debían pagar constituía una restricción indebida al derecho a la libertad de expresión. Al examinar la cuestión el Tribunal sostuvo que el monto no era proporcional al fin perseguido (proteger la reputación de la empresa) si se tomaba en cuenta el rol decisivo que juegan los grupos de campaña para promover la discusión de asuntos de interés público. El Tribunal indicó que aunque las afirmaciones vertidas en los panfletos no eran verdaderas, éstos contenían alegaciones en torno a asuntos de preocupación general que buscaban estimular el debate en la sociedad británica sobre temas tales como la salud y el medio ambiente. El Tribunal señaló además que el monto indemnizatorio, si bien podía ser considerado moderado al compararse con casos similares en el Reino Unido, era sustancialmente alto al tomarse en cuenta los limitados ingresos de Steel y Morris.

66. El Tribunal encontró además que la falta de ayuda legal gratuita en el proceso por difamación llevado a cabo ante los tribunales domésticos (razón por la cual el Tribunal encontró violación al artículo 6.1 del Convenio Europeo) creó serias dificultades para la defensa de Steel y Morris, afectando también su derecho a la libertad de expresión.

*Caso Ukrainian Media Group v. Ucrania (29 de marzo de 2005)*⁴⁹

67. El 21 de agosto de 1997 el periódico *The Day* publicó un artículo de Tetyana E. Koroba titulado: "*Is this a second Yurik for poor Yoriks, or a Ukrainian version of Lebed?*". El 14 de septiembre de 1999 el periódico publicó otro artículo de Koroba titulado: "*On the Sacred Crow and the Little Sparrow: Leader of the CPU as Kuchma's Last Hope*". Ambos artículos realizaban una serie de afirmaciones críticas con relación a Natalia Vitrenko y Petro Symonenko, líderes de los partidos socialista y comunista, respectivamente, y candidatos presidenciales en las elecciones de 1999. Vitrenko y Symonenko presentaron demandas ante las autoridades judiciales ucranianas alegando que la información publicada era falsa y que ésta afectaba su honor y reputación. El 3 de marzo de 2000 la Corte Distrital de Kiev ordenó a *The Day* el pago de 369 Euros a Natalia Vitrenko y el 8 de junio de 2000 el pago de 184 Euros a Petro Symonenko. La Corte Distrital de Kyiv también ordenó la publicación en el diario de parte de las sentencias así como de una rectificación respecto de la información publicada que a criterio de la corte era falsa.

⁴⁸ *Steel and Morris v. the United Kingdom*, No. 68416/01, ECHR 2004. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Steel%20%7C%20y%20%7C%20Morris&sessionid=10184835&skin=hudoc-en>.

⁴⁹ *Ukrainian Media Group v. Ukraine*, No. 72713/01, ECHR, 2005. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=72713/01&sessionid=9985862&skin=hudoc-en>.

68. En su decisión el Tribunal Europeo señaló que la libertad de prensa permite el uso de cierto grado de exageración e incluso de provocación. Asimismo, el Tribunal Europeo reafirmó su posición en cuanto a la distinción entre afirmaciones sobre hechos y juicios de valor, señalando que mientras que la existencia de hechos puede ser demostrada, lo mismo no sucede en cuanto a los juicios de valor. Requerir probar la veracidad de los juicios de valor, afirmó el Tribunal Europeo, es violatorio del artículo 10 del Convenio Europeo.

69. Específicamente, el Tribunal destacó que la ley sobre difamación y la práctica jurisprudencial en Ucrania no realizaban distinción alguna entre juicios de valor y afirmaciones sobre hechos, lo que podría implicar decisiones incompatibles con el artículo 10 del Convenio Europeo. Asimismo, consideró que las críticas presentes en ambos artículos se dieron en base a un lenguaje sarcástico y declaraciones de carácter polémico que constituyen juicios de valor en el contexto de la retórica política, lo cual no es susceptible de prueba. Por ello el Tribunal concluyó que la interferencia impuesta por los tribunales ucranianos no respondía a necesidad imperiosa alguna lo que generaba una violación del artículo 10 del Convenio Europeo. El Tribunal señaló además que en casos como éste debía primar el interés público de la discusión política que se produce en el marco de una campaña electoral.

*Caso I.A. v. Turquía (13 de septiembre de 2005)*⁵⁰

70. En noviembre de 1993 la imprenta Berlín, de propiedad del señor I.A., publicó una novela titulada "*Yasak Tumceler*" ("Las Frases Olvidadas") en la que se abordaban literariamente algunos temas teológicos. El 2 de diciembre de 1997 el señor I.A. fue condenado por el delito de blasfemia contra "Dios, la religión el profeta y el libro sagrado" por la publicación de la mencionada obra y sometido a una pena de dos años de cárcel y al pago de una multa. Posteriormente, la pena de cárcel fue conmutada por el pago de una multa adicional.

71. En su decisión el Tribunal Europeo afirmó que en el contexto de las creencias religiosas existe un deber de evitar expresiones "gratuitamente ofensivas". Señaló además que quienes manifiestan sus creencias en determinada religión deben tolerar las críticas a ésta y la difusión de otros credos. En el caso concreto el Tribunal consideró sin embargo que determinados aspectos de la novela podrían implicar una ofensa para los fieles islámicos.

72. El Tribunal concluyó que las medidas adoptadas por los tribunales turcos protegían ciertos valores considerados sagrados para los practicantes del islamismo y consideró que en este caso la restricción se amparaba en una necesidad social imperiosa. Por último, el Tribunal señaló que en la medida que no fue prohibida la circulación del libro y dada la reducida cantidad de la multa aplicada, la sanción aplicada era proporcional para los fines que buscaba proteger.

*Caso Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH v. Austria (19 de enero de 2006)*⁵¹

73. El 13 de noviembre de 1996 la revista "*Der 13. -Zeitung der Katholiken für Glaube und Kirche*", de propiedad de la empresa *Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH*, publicó varias cartas dirigidas al editor de la publicación en torno a un "Movimiento de Reforma de la Iglesia" organizado por católicos progresistas en Austria. Una de las cartas hacía referencia al señor Paarhammer,

⁵⁰ *I.A. v. Turkey*, No. 42571/98, ECHR, 2005. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=turkey%20%7C%2010&sessionid=9787499&skin=hudoc-en>.

⁵¹ *Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH v. Austria*, No. 46389/99, ECHR, 2006. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Caso%20%7C%20Albert-Engelmann-Gesellschaft%20%7C%20mbH&sessionid=10185010&skin=hudoc-en>.

Vicario General de la Arquidiócesis de Salzburgo, en donde se le calificaba como “rebelde” y “crítico de la iglesia, razón por la que debía ser removido de su cargo”. La carta hacía referencia a un comunicado de prensa del 30 de diciembre de 1988 y a una entrevista radial del 10 de enero de 1989 en donde el señor Paarhammer había expresado su descontento con la forma como la Santa Sede había elegido a las autoridades eclesiásticas de la zona. El señor Paarhammer inició una acción penal por difamación en contra de la empresa. Las cortes austriacas encontraron que las afirmaciones carecían de base fáctica -el “Movimiento de Reforma de la Iglesia” era inexistente- y que se constituían en un ataque directo a la reputación del sacerdote. Como resultado de ello la empresa fue condenada al pago de una compensación económica a favor de Paarhammer, tanto más que éste no tuvo oportunidad de ejercer su derecho a réplica frente a tal carta.

74. En su decisión el Tribunal Europeo sostuvo que las razones brindadas por el Estado aunque “relevantes” no eran “suficientes” para justificar la restricción impuesta sobre la libertad de expresión del medio periodístico. El Tribunal inició sus consideraciones señalando que la publicación se realizó en el contexto de un debate abierto con el editor de la revista, en torno a la necesidad de que los sacerdotes considerados “críticos” sean removidos de todo puesto de confianza en la iglesia.

75. El Tribunal valoró positivamente lo decidido en las cortes domésticas en cuanto al hecho que la carta podría poner en peligro la reputación de Paarhammer como sacerdote leal a la Arquidiócesis de Salzburgo, especialmente ante los lectores de la revista que en su mayoría pertenecían al sector más conservador del catolicismo en Austria. En ese sentido, coincidió con las cortes austriacas en que la revista tampoco habría cumplido con los principios de la ética periodística al no haber dado la oportunidad a Paarhammer para realizar una réplica. Sin embargo, no estimó que tales consideraciones hubieran sido “suficientes” para justificar la medida pues los comentarios vertidos en la carta fueron opiniones y no afirmaciones de hecho en medio de un contexto de debate sobre asuntos eclesiásticos. Además, el Tribunal sostuvo que requerir a la prensa que se distancie formal y sistemáticamente de un tercero que pueda insultar o provocar en otros un daño a su reputación no es reconciliable con el rol que ésta tiene de proveer información sobre eventos, opiniones e ideas de público interés.

*Caso Giniewski v. Francia (31 de enero de 2006)*⁵²

76. El 4 de enero de 1994 el señor Paul Giniewski publicó un artículo en el periódico *Le quotidien de Paris* en donde criticaba el contenido de la encíclica papal “El Esplendor de la Verdad”. Tras recibir una denuncia de la *Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF)*, la Corte Penal de París consideró que el artículo difamaba a los miembros de la comunidad cristiana y el 8 de marzo de 1995 condenó al señor Giniewski y al director del periódico al pago de una multa. Asimismo, la Corte ordenó que los encausados pagasen los costos de la publicación de la sentencia en un periódico de circulación nacional.

77. En su decisión el Tribunal Europeo consideró que en el marco de las creencias religiosas existe una obligación de evitar al máximo posible “aquellas expresiones gratuitamente ofensivas y que no contribuyen a un debate público constructivo”. En cuanto al artículo publicado por Giniewski el Tribunal señaló que aunque criticaba el contenido de la encíclica y la posición de las autoridades papales, éste no contenía un ataque a las creencias religiosas sino un punto de vista periodístico e histórico sobre temas como la persecución y el exterminio de los judíos en Europa. En

⁵² *Giniewski v. Francia*, No. 30007/96, ECHR, 2005. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=giniewski%20%7C%20france&sessionid=9787377&skin=hudoc-en>.

este sentido el Tribunal consideró que el contenido del artículo contribuía a un debate público sobre la materia.

78. Por último, el Tribunal señaló que aunque el señor Giniewski fue absuelto en el procedimiento penal, la sanción impuesta en la vía civil era desproporcionada en vista del debate público que intentó generar y del interés público relacionado con la publicación.

*Caso Malisiewicz-Gąsior v. Polonia (6 de abril de 2006)*⁵³

79. El 16 de septiembre de 1992 Izabela Malisiewicz-Gąsior fue puesta en libertad luego de haber sido detenida preventivamente –junto a su hijo y esposo– acusada de haber participado en el secuestro de M.K., hija del señor Kern, un funcionario del Estado. El 22 de agosto de 1993 Malisiewicz-Gąsior, candidata independiente en las elecciones parlamentarias de Polonia, publicó un artículo en el diario *Angora*. En la nota se hacía referencia, *inter alia*, a su propuesta política como candidata independiente y a la naturaleza de la vinculación de su familia con la del señor Kern. Para ese entonces M.K. y el hijo de Malisiewicz-Gąsior habían contraído matrimonio. El 5 de septiembre de 1993 Malisiewicz-Gąsior publicó un nuevo artículo sobre la misma temática. En esta segunda publicación, sin embargo, hizo referencia a que el señor Kern, abusando de su poder como funcionario del Estado, presionó a las autoridades para que ella fuera acusada y procesada por el secuestro de M.K., indicando que por órdenes suyas fue recluida en una celda para enfermos mentales. Estas mismas afirmaciones fueron reiteradas radial y televisivamente. El 27 de septiembre de 1993 el señor Kern acusó penalmente a Malisiewicz-Gąsior por difamación. El 18 de noviembre de 1997 Malisiewicz-Gąsior fue sentenciada por el delito de difamación a un año de pena privativa de la libertad, a publicar dicha resolución judicial y a pedir disculpas al señor Kern en *Angora*.

80. En su decisión el Tribunal Europeo encontró que las autoridades polacas, al condenar penalmente a Malisiewicz-Gąsior, restringieron indebidamente su derecho a la libertad de expresión. El Tribunal consideró que las alegaciones realizadas en los artículos y declaraciones de Malisiewicz-Gąsior se produjeron como parte del debate político de una elección, respecto de la actuación de un funcionario del Estado y a partir de su propia experiencia en el curso del proceso penal que le iniciara el señor Kern por el secuestro de su hija. El Tribunal sostuvo que aunque el fin perseguido (la protección de la reputación del señor Kern) era legítimo, la sanción penal impuesta en dicho caso no resultaba “necesaria en una sociedad democrática”.

*Caso Raichinov v. Bulgaria (20 de abril de 2006)*⁵⁴

81. El 15 de diciembre de 1993 se llevó a cabo una reunión del Consejo Supremo Judicial de Bulgaria, a la que asistieron, *inter alia*, Hristo Peshev Raichinov –por entonces director de la división de apoyo financiero y logístico del Ministerio de Justicia– y el señor S –por entonces Procurador General del Estado. En dicho encuentro Raichinov señaló –en el marco de una discusión sobre la Ley de Presupuesto del Estado– que en su opinión el señor S “no era una persona limpia”. El Procurador General solicitó que Raichinov saliera de la reunión y que clarifique el sentido de su afirmación. Raichinov se retractó. El 16 de febrero de 1994 se inició un proceso penal en contra de Raichinov alegando la afectación del honor y la dignidad del señor S. El 8 de julio de 1998 las cortes búlgaras sentenciaron a Raichinov al pago de una multa y a recibir una amonestación pública.

⁵³ *Malisiewicz-Gąsior v. Poland*, No. 43797/98, ECHR, 2006. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Malisiewicz-G%u0105sior&sessionid=10185010&skin=hudoc-en>.

⁵⁴ *Raichinov v. Bulgaria*, No. 47579/99, ECHR, 2006. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Raichinov&sessionid=10185010&skin=hudoc-en>.

82. En su decisión el Tribunal Europeo consideró que la restricción impuesta a la libertad de expresión de Raichinov no resultaba necesaria en una sociedad democrática. En su examen el Tribunal reafirmó que los límites a la crítica de los funcionarios del Estado son más amplios que los de los particulares. Indicó además que el debate llevado a cabo en la reunión versaba sobre un asunto de interés general y que, dado que el encuentro se había llevado a cabo a puerta cerrada, el impacto negativo de la afirmación de Raichinov sobre la reputación del señor S –si lo hubiese– se encontraba bastante limitado. El Tribunal también valoró en su análisis el hecho que el debate se haya desarrollado solamente en un intercambio oral y que el Procurador General pudo haber acudido a otras vías fuera de la penal para responder a las críticas en su contra.

2. Orden Público

*Caso Baran v. Turquía (10 de noviembre de 2004)*⁵⁵

83. El 3 de junio de 1997 una corte local en Estambul ordenó la confiscación de doscientos ejemplares de un panfleto preparado por Zeynep Baran, presidenta de una fundación dedicada a la investigación de la problemática de las mujeres kurdas, en el que se describían las actividades y objetivos de tal organización. El panfleto colocaba especial énfasis en la condición de las mujeres kurdas en Turquía. Posteriormente, el 6 de junio de 1997 el procurador de la República inició un proceso penal en contra de Baran alegando que el panfleto constituía una incitación a la violencia, al odio y al resentimiento, y que además discriminaba con base en la pertenencia a un determinado grupo social. Se señaló específicamente que el panfleto tenía como objetivo último realizar propaganda separatista. El 7 de agosto de 1998 Baran fue condenada a una pena de prisión por dos años y al pago de una multa.

84. Al examinar la cuestión el Tribunal Europeo puso especial atención a los términos empleados en el panfleto y el contexto de su publicación. Consideró así que si bien el panfleto describía una temática sensible: la condición de las mujeres kurdas en Turquía, éste no exhortaba en ninguno de sus pasajes al uso de la violencia, la resistencia armada, la insurrección ni incitaba a un discurso de odio. En ese sentido, el Tribunal consideró que la condena contra Baran era desproporcionada al fin perseguido (garantizar la integridad territorial), es decir, que no era necesaria en una sociedad democrática.

*Caso Kyprianou v. Chipre (15 de diciembre de 2005)*⁵⁶

85. El 14 de febrero de 2001 el abogado Michalakis Kyprianou participaba en una audiencia respecto de uno de sus clientes en la Corte de Limassol Assize. Mientras realizaba el interrogatorio de uno de los testigos propuestos por la Fiscalía, Kyprianou fue interrumpido por los jueces quienes cuestionaron la forma en que éste venía llevando a cabo el interrogatorio. Kyprianou consideró la interrupción como una ofensa y solicitó ser retirado inmediatamente del caso. Kyprianou y los magistrados iniciaron entonces una discusión que culminó con la interrupción de la audiencia y la posterior condena de Kyprianou por “desacato a la Corte” a cinco días de cárcel y a una multa de 130 euros.

⁵⁵ *Baran c. Turquie*, No. 48988/99, ECHR, 2004. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=baran&sessionid=9803209&skin=hudoc-en>.

⁵⁶ *Kyprianou v. Cyprus*, [GC] No. 73797/01, ECHR, 2005. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Kyprianou&sessionid=9787377&skin=hudoc-en>.

86. En su decisión el Tribunal Europeo afirmó que los abogados tienen una posición central en la administración de justicia como intermediarios entre el público y los tribunales. Destacó sin embargo, que la libertad de expresión de un abogado en los tribunales no es ilimitada, pudiendo ser restringida, conforme al artículo 10 del Convenio Europeo, para la protección de ciertos intereses como el respeto a la autoridad del Poder Judicial. El Tribunal continuó su análisis señalando que en la defensa de un cliente ante una corte los abogados pueden pasar por situaciones delicadas en las cuales deben decidir si objetan o cuestionan la conducta de los magistrados considerando los intereses de sus clientes. El Tribunal Europeo manifestó así que, en el caso concreto, al imponerse una sanción penal contra Kyprianou no hubo un debido balance entre la protección de la autoridad del Poder Judicial y la protección del derecho a la libertad de expresión. El Tribunal realizó esta consideración tomando en cuenta que la ley permitía se impusieran sanciones menos restrictivas. Concluyó por ello que la pena aplicada fue desproporcionadamente severa y que ésta podía generar un efecto inhibitorio en la labor del abogado como defensor en un caso.

87. En el mismo orden de ideas, el Tribunal Europeo señaló que en el caso la imposición de una pena de prisión también afectaba el derecho a un debido proceso, por lo cual consideró que se había violado igualmente el artículo 6.1 del Convenio Europeo.

*Caso Koç y Tambaş v. Turquía (21 de marzo de 2006)*⁵⁷

88. El 24 de agosto de 1998 la Corte de Seguridad Estatal de Estambul condenó a Tayfun Koç y Musa Tambaş por el delito de "difusión de propaganda en contra de la indivisible unidad del Estado". Tayfun Koç y Musa Tambaş, propietario y editor de la revista mensual "*Revolution for Equality, Liberty, and Peace*", fueron condenados al pago de una multa, el cierre temporal de la revista y la confiscación de varios de sus ejemplares, luego de publicar tres artículos relacionados con las autoridades del Estado turco. Específicamente, en uno de los artículos se alegaba la existencia de serios problemas carcelarios en Turquía, atribuyéndose al Ministro de Justicia la responsabilidad por la muerte de dos presos que estuvieron en huelga de hambre. El 6 de junio de 2003 las sentencias condenatorias fueron anuladas.

89. En su decisión el Tribunal Europeo encontró que la restricción impuesta se encontraba prevista en la ley y que perseguía intereses legítimos: la protección de la integridad territorial del Estado, la unidad nacional y la protección de las autoridades del Estado para no ser identificadas como blancos de ataques terroristas. Sin embargo, al momento de examinar la restricción impuesta a la luz del criterio de "necesidad en una sociedad democrática", el Tribunal consideró que ésta no era proporcional a los fines perseguidos pues aunque los artículos tenían cierto tono de hostilidad hacia las autoridades del Estado, éstos en su conjunto no incitaban a la violencia, la resistencia armada, la insurrección o se constituían en un discurso de odio. El Tribunal señaló que a pesar de la suspensión y eventual anulación de las sentencias condenatorias, la amenaza misma de la imposición de una condena tiene un efecto intimidatorio para el ejercicio de la profesión periodística, lo cual genera autocensura.

⁵⁷ *Koç and Tambaş v. Turkey*, No. 50934/99, ECHR, 2006. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=6&portal=hbkm&action=html&highlight=Ko%E7&sessionid=10185225&skin=hudoc-en>.

3. Censura Previa

*Caso Editorial Plon v. Francia (18 de mayo de 2004)*⁵⁸

90. El 18 de enero de 1996 el presidente del *Tribunal de Grande Instance* de París ordenó, a través de una medida cautelar, que se prohibiera temporalmente la circulación del libro *Le Grand Secret* de la editorial *Plon*. En dicho libro, que contaba con la coautoría de uno de los médicos privados del ex presidente Mitterrand, se revelaban detalles del tratamiento contra el cáncer que el ex mandatario había recibido desde 1981, cuando fue diagnosticado de dicha enfermedad. Mitterrand falleció el 8 de enero de 1996, días antes de la publicación de *Le Grand Secret* el 17 de enero de ese mismo año. La solicitud fue presentada por los familiares del ex presidente alegando el rompimiento del deber de confidencialidad por parte del médico así como la presunta violación de la vida privada del ex mandatario y sus familiares. Posteriormente, el 23 de octubre de 1996, el mismo tribunal decidió sobre el fondo de la cuestión ordenando al director de editorial *Plon* y al médico el pago de una reparación a favor de los familiares de Mitterrand. La corte señaló además que la prohibición de circulación del libro debía mantenerse. Ambas resoluciones judiciales fueron cuestionadas por editorial *Plon* ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que procedió a examinarlas por separado.

91. Al analizar la prohibición temporal de circulación de *Le Grand Secret*, el Tribunal Europeo consideró que el libro fue publicado en un contexto de amplio debate en Francia en torno al derecho del público a ser informado en torno al estado de salud de Mitterrand, así como a la capacidad del ex mandatario para dirigir al Estado bajo tal condición.

92. En cuanto a la medida cautelar el Tribunal Europeo consideró que ésta se adecuaba al requisito de "necesidad en una sociedad democrática" porque consideró que se habían violado las leyes vigentes en Francia relacionadas a la confidencialidad médica. El Tribunal realizó esta consideración tomando en cuenta que la medida cautelar fue ordenada un día después de la publicación del libro y 10 días luego del fallecimiento de Mitterrand. Consideró así que en dicho contexto, la restricción "temporal" a la libertad de expresión de la editorial resultaba proporcional al fin de proteger los derechos de Mitterrand y sus familiares.

93. En cuanto a la medida ordenada como parte de la decisión sobre el fondo, el Tribunal Europeo consideró que el contexto era distinto. En opinión del Tribunal Europeo, dada la naturaleza permanente de la segunda medida y el debate generado en la sociedad francesa sobre dicha temática, no existía ya una necesidad social imperiosa que la justificase. El Tribunal Europeo señaló que al 23 de octubre de 1996 cerca de 40.000 copias del libro ya habían sido distribuidas, fuera de la circulación del texto en el Internet, lo que generaba que la información no tuviera en la práctica carácter confidencial. Por tanto, el Tribunal encontró que desde el 23 de octubre de 1996 la prohibición judicial de circulación de *Le Grand Secret* era violatoria del artículo 10 del Convenio Europeo. El Tribunal Europeo señaló además que la medida resultaba desproporcionada considerando que editorial *Plon* debía pagar una reparación por daños a los familiares del ex mandatario.

⁵⁸ *Editions Plon v. France*, No. 58148/00, ECHR, 2004. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Editorial%20%7C%20Plon&sessionid=10185225&skin=hudoc-en>.

*Caso Goussev y Marenk v. Finlandia (17 de enero de 2006)*⁵⁹

94. En noviembre de 1995 se produjo una manifestación en las inmediaciones de *Oyj Stockmann Abp*, una tienda por departamentos en Helsinki, en protesta por su política de venta de abrigo de piel y su presunta participación en actos de crueldad en contra de los animales. Al mismo tiempo varios panfletos y afiches fueron distribuidos en Helsinki criticando la venta de abrigo de piel y la política de ventas de *Stockmann*. En marzo de 1996 *Stockmann* solicitó a la policía que investigara la distribución de los panfletos y afiches. La policía condujo allanamientos el 31 de mayo de 1996 en casa de la señora Goussev y el 23 de julio de 1996 en casa del señor Marenk. La razón expresada para la medida fue la participación de Goussev y Marenk en una protesta de otra naturaleza en mayo de 1996. Durante la intervención policial, sin embargo, 122 panfletos relacionados a *Stockmann* fueron requisados. Goussev y Marenk iniciaron procedimientos judiciales a fin de que la medida de incautación del material fuera levantada. Goussev y Marenk fueron posteriormente acusados penalmente bajo el cargo de difamación pública. El 15 de mayo de 1997 el material requisado fue devuelto y el 18 de junio de 1997 Goussev y Marenk fueron absueltos por las cortes locales.

95. En su decisión el Tribunal Europeo se centró en determinar si la medida de incautación se encontraba "prevista en la ley". Consideró que las normas de la legislación de Finlandia sobre la materia resultaban "problemáticas" pues "no establecían claramente las circunstancias en las cuales la policía podía requisar material potencialmente difamatorio durante incautaciones realizadas con el propósito de encontrar evidencia relacionada a otros posibles delitos". El Tribunal concluyó que la incautación no "estaba prevista en la ley" dado que las normas sobre la materia no estaban formuladas con precisión suficiente que garantizase a los individuos la previsibilidad requerida en los términos del artículo 10 del Convenio Europeo.

*Caso Partido Popular Cristiano (PPC) v. Moldavia (14 de febrero de 2006)*⁶⁰

96. Hacia finales del año 2001 el gobierno de Moldavia hizo público su propósito de hacer obligatorio el estudio del ruso para ciertos niveles de la educación primaria. Dicha iniciativa recibió una fuerte crítica de parte de grupos opositores al gobierno, generando debate en la opinión pública del país. El 26 de diciembre de 2001 un grupo de parlamentarios del PPC informó al Concejo Municipal de Chişinău de su intención de llevar a cabo el 9 de junio de 2002 una reunión con sus seguidores sobre dicha temática en la plaza pública situada al frente de los edificios de la sede del gobierno. De acuerdo a los miembros del PPC, las normas aplicables no obligaban a los parlamentarios a pedir autorización alguna para la realización de este tipo de reuniones. El 3 de enero de 2002, sin embargo, el Concejo Municipal calificó la reunión como una "protesta", autorizando su desarrollo en una plaza pública distinta. Posteriormente, el 23 de enero de 2002 el Concejo Municipal informó al Ministerio de Justicia de las discrepancias existentes en la legislación interna relacionada al caso, decidiendo por ello el 26 de enero de 2002 suspender la realización de la reunión del PPC hasta que el Parlamento se pronuncie realizando una interpretación oficial de la legislación aplicable.

97. El PPC llevó a cabo la reunión el 9 de enero de 2002 en la locación original. También desarrolló reuniones en días posteriores; en todos estos casos informó al Concejo Municipal sin

⁵⁹ *Goussev and Marenk v. Finland*, No. 35083/97, ECHR, 2006. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Goussev&sessionid=10185276&skin=hudoc-en>.

⁶⁰ *Christian Democratic People's Party v. Moldova*, No. 28793/02, ECHR, 2006. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=28793/02&sessionid=10185276&skin=hudoc-en>.

solicitar su autorización. El 14 de enero de 2002 el Ministro de Justicia emitió una comunicación advirtiéndole al PPC que las reuniones fueron llevadas a cabo sin la autorización debida. El presidente del PPC respondió señalando que la reunión no fue organizada por el PPC sino por un grupo de sus parlamentarios, lo que hacía que no se requiriera tal autorización. El 18 de enero de 2002 el Ministro de Justicia resolvió imponer una prohibición de un mes a las actividades del PPC. Pese a que la prohibición fue dejada posteriormente sin efecto, el 22 de febrero de 2002 la Corte Suprema de Justicia de Moldavia resolvió que las protestas fueron desarrolladas ilegalmente. Finalmente, el 17 de mayo de 2002 la Corte Suprema declaró que dado que las reuniones fueron ilegales, la sanción impuesta al PPC no resultaba desproporcionada.

98. En su decisión el Tribunal Europeo examinó las alegaciones en torno al derecho a la libertad de expresión dentro del marco del artículo 11 (libertad de reunión y de asociación) del Convenio Europeo. El Tribunal señaló que la protección de las opiniones y de la libertad de expresión es uno de los objetivos de la libertad de reunión y asociación del artículo 11. Asimismo, indicó que mientras que la libertad de expresión es importante para todos, lo es especialmente para quien es elegido como representante del pueblo. Por ello, las interferencias que se realicen a la libertad de expresión de un parlamentario de la oposición conllevan a que se desarrolle un examen muy cuidadoso de la restricción impuesta. El Tribunal señaló además que solamente las amenazas al pluralismo político y a los principios democráticos justifican una prohibición de las actividades de un partido político. Considerando que las reuniones realizadas públicamente tuvieron un carácter pacífico, el Tribunal concluyó que la prohibición temporal de las actividades del PPC era contraria a los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo. Más aún, indicó que inclusive una prohibición temporal puede razonablemente crear un efecto intimidatorio en el ejercicio de la libertad de expresión de un partido político.

*Caso Dammann v. Suiza (25 de abril de 2006)*⁶¹

99. El 1 de septiembre de 1997 un edificio en Zurich fue objeto de un robo, hecho que fue ampliamente divulgado en los medios de comunicación suizos. El 10 de septiembre de 1997 Víctor Ferdinand Dammann, periodista del diario *Blick*, informó a la asistente administrativa del Ministerio Público del Cantón de Zurich que tenía en su poder una lista con los nombres de las personas detenidas a raíz del robo. Asimismo, le solicitó información sobre los antecedentes penales de dichas personas. El señor Dammann recibió la información de la funcionaria del Ministerio Público y la trasladó a un policía, sin publicarla. El policía informó a las autoridades respecto de este hecho, iniciándose un proceso penal en su contra. El 7 de septiembre de 1999 el señor Dammann fue condenado por “instigación a la violación del secreto de función” en base a la legislación penal suiza, obligándosele al pago de 325 Euros a título de multa.

100. En su decisión el Tribunal Europeo tomó nota que el caso no estaba referido a la prohibición de una publicación o a las sanciones impuestas con posterioridad a una publicación sino más bien a los actos preparatorios relacionados a la investigación y búsqueda de información del periodista. El Tribunal afirmó que las restricciones a la libertad de prensa impuestas en dicha fase también eran de su entera competencia y que requerían de ésta el más escrupuloso nivel de análisis.

101. El Tribunal hizo hincapié que si bien los antecedentes judiciales de las personas son *a priori* dignos de protección, la información obtenida por la víctima estaba disponible en otros medios tales como los archivos de las decisiones judiciales y las publicaciones de la prensa. El Tribunal consideró que la información solicitada era de interés público y concluyó que la condena del señor

⁶¹ *Dammann c. Suisse*, No 77551/01, ECHR, 2006. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionSimilar=9985862&skin=hudoc-en&action=similar&portal=hbkml&item=1&similar=frenchjudgement>.

Dammann era desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática. En este sentido, señaló que la sanción impuesta desincentivaba la contribución de los periodistas a la discusión sobre asuntos que interesan a la colectividad, y por tanto que ésta violaba el artículo 10 del Convenio Europeo.

D. Jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas

102. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene en sus artículos 19 y 20 disposiciones específicas en relación con el derecho a la libertad de expresión. El texto de ambos artículos señala lo siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

- a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
- b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

[...]

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

103. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comparado el artículo 13 de la Convención Americana con el artículo 10 del Convenio Europeo y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, llegando a la conclusión de que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas⁶².

104. En su Informe Anual correspondiente al año 2004, la Relatoría Especial consideró parte de las comunicaciones resueltas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en materia de libertad de expresión, señalando su utilidad como “fuente valiosa [para] arrojar luz para la interpretación de este derecho en el sistema interamericano y [...] como una herramienta útil para los profesionales letrados y demás interesados”⁶³.

105. Las secciones que figuran a continuación se refieren a casos que merecieron decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre temas relacionados con el derecho de la libertad de expresión a partir del año 2005.

⁶² Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, Serie A No. 5, Sentencia del 13 de noviembre de 1995, párr. 50.

⁶³ CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2004. Volumen III, Capítulo III, párr. 2.

106. Los temas que se tratan en esta sección se dividen en los siguientes títulos: difamación y orden público. Los casos que figuran bajo el título de difamación refieren a situaciones en que se emprendieron acciones legales por desacato, calumnias, injurias o difamación por presuntamente dañar la reputación de otras personas a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Los casos examinados bajo el título de orden público están referidos a situaciones en que las restricciones cuestionadas son impuestas sobre la base de que son necesarias para la protección del orden público.

1. Difamación

Comunicación No. 1128/2002: Angola (18 de abril de 2005)
*Rafael Marques de Morais*⁶⁴

107. El 3 de julio, el 28 de agosto y el 13 de octubre de 1999 Rafael Marques de Morais publicó en el diario *El Ágora* diversos artículos en los que señalaba que el presidente de Angola era responsable “de la destrucción del país y de la situación calamitosa de las instituciones del Estado” y “de promover la incompetencia, la malversación y la corrupción como valores políticos y sociales”. El 13 de octubre de 1999 Marques de Morais, en una entrevista radial, reiteró los términos de las publicaciones. El 16 de octubre de 1999 Marques de Morais fue arrestado en su domicilio y trasladado a una unidad policial. Posteriormente, el 29 de octubre de 1999 fue trasladado a la cárcel de Viana en Luanda. El 25 de noviembre de 1999 fue liberado bajo fianza, siendo informado que había sido imputado de “cometer efectiva y continuamente los delitos característicos de difamación y calumnia contra el Excelentísimo señor Presidente de la República y contra el Fiscal General de la República”. El 31 de marzo de 2000 Marques de Morais fue condenado por difamación agravada y uso abusivo de la prensa por agravio a seis meses de cárcel, a una multa “para desalentar un comportamiento análogo” y al pago de una indemnización en favor del presidente de Angola. El 26 de octubre de 2000 el fallo relacionado al delito de difamación fue anulado, pero se mantuvo la condena por uso abusivo de la prensa por agravio; y se confirmó la pena de seis meses de cárcel, pero su aplicación fue suspendida. Posteriormente, el 2 de febrero de 2001, Marques de Morais fue amnistiado.

108. En la parte pertinente de su decisión, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pasó a examinar si el arresto, detención y condena impuestos sobre Marques de Morais “restringieron ilícitamente su derecho a la libertad de expresión en violación del artículo 19 del Pacto”. El Comité inició su análisis reiterando que “el derecho a la libertad de expresión [...] comprende el derecho de toda persona a criticar o evaluar abierta y públicamente a su gobierno sin temor de interferencia o castigo”. El Comité estimó luego que “aún cuando considerase que [el] arresto y detención o las restricciones de viaje que se le impusieron tenían fundamento en el derecho de Angola y que tales medidas, así como su condena, perseguían un fin legítimo, como proteger los derechos y la reputación del [p]residente o el orden público, no es posible concluir que esas restricciones eran necesarias para alcanzar uno de dichos objetivos. [...] el requisito de la necesidad lleva en sí un elemento de proporcionalidad, en el sentido de que el alcance de la restricción impuesta a la libertad de expresión debe ser proporcional al valor que se pretenda proteger con esa restricción”. De esta forma, el Comité señaló que se cometió una violación del artículo 19 del Pacto puesto que “la severidad de las sanciones impuestas al autor no se pueden considerar proporcionales a la protección del orden público o del honor y la reputación del [p]residente, una personalidad política que, en calidad de tal, está sujeto a la crítica y a la oposición”.

⁶⁴ Comunicación No. 1128/2002: Angola. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.83.D.1128.2002.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.83.D.1128.2002.Sp?Opendocument).

Comunicación No. 1180/2003: Serbia (23 de enero de 2006)
*Zeljko Bodrožić*⁶⁵

109. El 11 de enero de 2002 Zeljo Bodrožić publicó en una revista un artículo titulado *"Born for Reforms"* en donde criticaba los vínculos políticos de diversos personajes, entre ellos el señor Segrt, director de una empresa, miembro del Partido Socialista de Serbia y líder en el año 2001 del grupo parlamentario del partido en el Parlamento Federal de Yugoslavia. El 21 de enero de 2002 Segrt presentó una denuncia penal por calumnias e insultos contra el Bodrožić por el texto publicado. El 14 de mayo de 2002 Bodrožić fue condenado al pago de una multa y costas como autor del delito de insultos en la medida que las palabras utilizadas en el texto "no eran expresiones que debieran utilizarse en críticas serias, sino que, por el contrario, la sociedad aceptaba generalmente que esas expresiones causaban escarnio y eran denigrantes", en lugar de ser un "lenguaje literario apropiado para esa crítica".

110. En su decisión el Comité de Derechos Humanos de la ONU observó que debía determinar "si la condena del autor por el delito de insultos por el artículo que publicó [...] equivale a una violación del derecho a la libertad de expresión". El Comité observó que Serbia no había presentado ninguna justificación de que el enjuiciamiento y la condena del autor fueran "necesarios para la protección de los derechos y la reputación del Sr. Segrt". En ese sentido, el Comité concluyó que la sentencia y condena impuestas habían generado una violación del párrafo 2 del artículo 19 del Pacto, en la medida que "en los debates públicos sobre figuras políticas en una sociedad democrática, especialmente en los medios de comunicación, el valor que concede el Pacto a expresiones desinhibidas es especialmente alto". El Comité consideró que Serbia tenía la obligación de "proporcionar un recurso efectivo, que incluya la anulación de la condena, la restitución de la multa impuesta [...] y la restitución de las costas [...], así como una indemnización".

2. Orden Público

Comunicación No. 1022/2001: Bielorrusia (23 de noviembre de 2005)
*Vladimir Velichkin*⁶⁶

111. El 23 de noviembre de 2000 Vladimir Velichkin solicitó autorización al Comité Ejecutivo de Brest a fin de organizar una reunión en el exterior de una biblioteca pública en el centro de la ciudad para celebrar el 10 de diciembre del mismo año el aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 4 de diciembre de 2000 su solicitud para celebrar la reunión en el centro de Brest fue rechazada, pero fue autorizada para realizarse en un estadio que en una decisión anterior del Comité Ejecutivo había sido declarado "lugar permanente" para la organización de reuniones y asambleas. El 10 de diciembre de 2000 Velichkin comenzó a distribuir volantes con el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el centro de Brest. Ese mismo día un agente de policía se acercó a Velichkin y le solicitó que dejara de distribuir los volantes y se marchase. Velichkin se negó. Posteriormente, Velichkin fue conducido a las oficinas del departamento de policía local y detenido allí temporalmente. El 15 de enero de 2001 el Tribunal de Distrito de Leninsky de Brest impuso a Velichkin una multa "por celebrar una reunión en un lugar no autorizado por el Consejo Ejecutivo de la Ciudad de Brest, en violación de las disposiciones [...] de la Ley de asambleas, reuniones, marchas, manifestaciones y piquetes".

⁶⁵ Comunicación No. 1180/2003: Serbia. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.85.D.1180.2003.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.85.D.1180.2003.Sp?Opendocument).

⁶⁶ Comunicación No. 1022/2001: Bielorrusia. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.85.D.1022.2001.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.85.D.1022.2001.Sp?Opendocument).

112. En su decisión el Comité de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que “la actuación de las autoridades [...], independientemente de su calificación jurídica, constituye una limitación *de facto* de los derechos del autor consagrados en el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto”. Consideró que en el caso el Estado no había invocado motivo específico alguno “para justificar la imposición de restricciones a la actividad del autor (haya tenido o no lugar en el contexto de una reunión), y que indudablemente no representó amenaza alguna para el orden público, lo que debería ser necesario, a tenor del párrafo 3 del artículo 19 del Pacto”.

Comunicación No. 1009/2001: Bielorrusia (8 de agosto de 2006)
*Vladimir Viktorovich Shchetko y Vladimir Vladimirovich Shchetko*⁶⁷

113. El 27 de octubre de 2000 Vladimir Viktorovich Shchetko y Vladimir Vladimirovich Shchetko fueron condenados al pago de una multa por haber repartido el 12 de octubre de 2000 unos volantes en la vía pública y en los que incitaban a boicotear las elecciones parlamentarias previstas para el 15 de octubre de ese mismo año.

114. En su decisión el Comité consideró que para llevar a cabo su análisis debía distinguirse preliminarmente “entre la situación en que los votantes sean objeto de intimidación y coacción y la situación en que se los incite a boicotear una elección sin ninguna clase de intimidación”.

115. El Comité señaló que en el caso el Estado se había limitado a argumentar “que la restricción de los derechos de los autores se había realizado conforme a la ley, sin haber aportado justificación alguna de dicha restricción”. El Comité valoró el hecho de que la ley bajo la cual los señores Shchetko fueron condenados había sido posteriormente enmendada para armonizarla con las disposiciones del Código Electoral, que solamente prohibía hacer campaña en el día de las elecciones. Lo anterior, en opinión del Comité “subraya[ba] la falta de justificación razonable de las restricciones previstas en esa ley”.

116. Finalmente, el Comité consideró que de la información entregada no podía deducirse “que los actos de los autores afectaran, de la manera que fuere, a la libertad de los votantes de decidir si participarían, o no, de las elecciones generales en cuestión”. Por tanto, concluyó que la multa impuesta no se justificaba con arreglo a alguno de los criterios del párrafo 3 del artículo 19.

Comunicación No. 968/2001: República de Corea (23 de agosto de 2005)
*Kim Jong-Cheol*⁶⁸

117. El 11 de diciembre de 1997 Kim Jong-Cheol publicó un artículo en un semanario en el que se incluían datos sobre unas encuestas de opinión realizadas el 31 de julio y 11 de diciembre de 1997, en el marco de las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo el 18 de diciembre de 1997 en Corea. El 16 de julio de 1998 Jong-Cheol fue condenado al pago de una multa por haber violado las disposiciones de la Ley Electoral que sancionaba penalmente a quien divulgara encuestas de opinión durante los 23 días anteriores a las elecciones, incluido el día de la votación.

118. En su análisis, el Comité afirmó que a través de sus artículos Jong-Cheol “ejercía su derecho a transmitir información e ideas dentro del significado del párrafo 2 del artículo 19 del Pacto”. Sin embargo, al examinar la restricción impuesta consideró que “el razonamiento en que

⁶⁷ Comunicación No. 1009/2001: Bielorrusia. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.87.D.1009.2001.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.87.D.1009.2001.Sp?Opendocument).

⁶⁸ Comunicación No. 968/2001: República de Corea. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.84.D.968.2001.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.84.D.968.2001.Sp?Opendocument).

[ésta] se basa [...] es el deseo de dar al electorado un periodo limitado de reflexión durante el cual estará al abrigo de consideraciones ajenas a las cuestiones que se debaten en las elecciones y que se aplican restricciones análogas en muchos países. El Comité observa también que las características de la historia reciente de los procesos políticos democráticos del Estado Parte, incluidos los mencionados por el propio Estado Parte. En tales circunstancias, una ley que restrinja la publicación de las encuestas de opinión por un periodo limitado de tiempo antes de una elección no parece *ipso facto* vulnerar los objetivos del párrafo 3 del artículo 19".

119. En cuanto a la cuestión de la proporcionalidad de la medida el Comité estimó que "aunque el periodo de limitación de 23 días antes de la elección es inusualmente prolongado, no es necesario que se pronuncie sobre la compatibilidad *per se* del periodo de limitación con el párrafo 3 del artículo 19, puesto que el hecho inicial del autor, a saber, la publicación de encuestas de opinión inéditas, tuvo lugar siete días antes de la elección". En ese sentido, el Comité concluyó que la condena del autor por esa publicación –aún cuando entrase en el ámbito penal- no podía considerarse excesiva "en el contexto de las condiciones establecidas en el Estado Parte", y que por tanto, no había violación del artículo 19 del Pacto.

Comunicación No. 1157/2003: Australia (10 de agosto de 2006)
*Patrick Coleman*⁶⁹

120. El 20 de diciembre de 1998 Patrick Coleman pronunció un discurso en un paseo peatonal en Townsville, Queensland, sin contar con la autorización del Consejo Municipal de Townsville. Como resultado de ello, el 3 de marzo de 1999 Coleman fue condenado por el Tribunal de Faltas de Townsville al pago de una multa más diez días de prisión "por pronunciar un discurso ilícito". El 29 de agosto de 1999, y al no pagar la multa, Coleman fue detenido por la policía permaneciendo recluido en la comisaría local durante cinco días.

121. El 21 de noviembre de 2000 el Tribunal de Apelaciones de Queensland desestimó la apelación de Coleman frente a la medida señalando que "la ordenanza cumplía el fin legítimo de proteger a los usuarios del pequeño paseo peatonal de las arengas de los discursos públicos. La ordenanza también era razonablemente adecuada y adaptada a cumplir esa finalidad ya que abarcaba una zona muy limitada, dando numerosas oportunidades de pronunciar esos discursos en otros lugares adecuados".

122. El Comité inició su análisis sobre el fondo de la cuestión examinando "si la restricción era necesaria para alcanzar uno de los objetivos estipulados en el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto, en particular el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o el orden público". El Comité consideró que Coleman había pronunciado un discurso en público que versaba "sobre cuestiones de interés público". Continuó con su razonamiento indicando que "no había indicación alguna de que el discurso del autor representase un peligro, una perturbación indebida o una amenaza de cualquier otra índole para el orden público en el paseo; de hecho, los policías allí presentes, en lugar de poner fin al discurso del autor, le permitieron continuar mientras lo filmaban en vídeo. El autor pronunció su discurso sin poseer una autorización. Por ello, fue multado y, al no pagar la multa, se le mantuvo detenido durante cinco días". El Comité concluyó señalando que la respuesta del Estado frente a la conducta era desproporcionada y equivalente a una restricción de la libertad de expresión de Coleman incompatible con el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto.

⁶⁹ Comunicación No. 1157/2003: Australia. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.87.D.1157.2003.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.87.D.1157.2003.Sp?Opendocument).